

RESOLUCION N. 02524
“POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

**LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE**

En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución No. 1466 del mayo de 2018, modificada por la Resolución No. 2566 de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013 el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 01 de 1984 y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, realizó visita de inspección el día 13 de septiembre de 2007, al establecimiento de comercio denominado **CARNES JM2**, ubicado en la Carrera 62 B No. 57 D - 33 Sur, de la localidad de Kennedy de esta ciudad, de propiedad del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.814, en donde desarrollaba actividades de expendio de carnes.

Que la totalidad de las conclusiones obtenidas en la diligencia quedaron consignadas en el **Concepto Técnico No. 12609 de 2007**, el cual concluyó:

“(…) 5. CONCLUSIONES

Los establecimientos Vicerias Los Caliches y Carnes JM2, se localizan en el predio de nomenclatura Carrera 62 B No. 57 D – 33 sur, el cual se encuentra ubicado fuera de zona de ronda del río Tunjuelo. Los dos establecimientos están separados por un muro que atraviesa todo el predio como se observa en el registro fotográfico.

Desde el punto de vista técnico, se determinó que los dos establecimientos, generan vertimientos de tipo industrial y actualmente no cuenta con permiso de vertimientos, realizaron el trámite de solicitud de permiso de vertimientos a través del radicado 40079-06, adjuntando la documentación correspondiente, la cual fue evaluada mediante CTE 2886-07.

De acuerdo a lo emitido en el concepto 2886-07, no se otorgó permiso de vertimientos, ya que las caracterizaciones de vertimientos industriales del 25 de mayo de 2006, presentada por los establecimientos Vicerias los Caliches y Carnes JM2, no eran representativas puesto que el tiempo de muestreo fue de 22 minutos, lapso que no permite establecer el comportamiento real de los parámetros analizados, debido a que el vertimiento en cuestión no puede considerarse como puntual

teniendo en cuenta que la actividad de comercialización de vísceras implica lavados constantes, razón por la cual no puede considerarse representativa del vertimiento.

Desde el punto de vista técnico este Departamento considera que no es viable otorgar el permiso de vertimientos hasta tanto los establecimientos no remitan una caracterización que represente comportamiento real de la descarga industrial generada, la cual sea recolectada y analizada con todos los parámetros de interés y se presente cumplimiento de los parámetros requeridos por la Resolución DAMA NO. 1074 DE 1997, además debe allegar la totalidad de la información requerida para el otorgamiento del permiso de vertimientos.

Finalmente, teniendo en cuenta que en el mismo predio se ubican dos establecimientos con actividades comerciales, representante legal y razones diferentes y que descargan sus vertimientos industriales en un solo punto, es necesario que la Dirección Legal Ambiental estudie el caso y defina si es necesario que cada establecimiento realice el trámite del permiso de vertimientos (...)

Que posteriormente, la Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, realizó visita de inspección el día 17 de abril de 2008, al establecimiento de comercio denominado **CARNES JM2**, ubicado en la Carrera 62 B No. 57 D - 33 Sur, de propiedad del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.814, la cual dejó como resultado el **Concepto Técnico No. 07066 del 19 mayo de 2008**, el cual concluyó:

“(...) 6. CONCLUSIONES

*Desde el punto de vista técnico esta oficina evaluó la información remitida por la EAAB EAAB relacionada con los resultados de caracterización realizada el 26 de noviembre de 2007 (Consecutivo 2007 -C3-E026) donde se determinó que el vertimiento del establecimiento VICERAS CALICHE **incumple** la norma de vertimientos en el parámetro de GRASAS y ACEITES. Se solicita a la Dirección Legal proceder de conformidad por el incumplimiento de la empresa.*

Se reitera lo establecido en el Concepto Técnico 12609 del 9/11/2007 y solicita a la Dirección Legal Ambiental dar trámite a lo solicitado en dicho concepto y determinar los compromisos a establecer para los establecimientos VICERAS CALICHE y CARNES JM2, toda vez que en desarrollo de sus actividades generan vertimientos que son manejados por un sistema de tratamiento de aguas residuales común para ambos establecimientos y con un mismo punto de descarga (...)

Que en vista de la situación la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante **Resolución No. 2795 del 19 de marzo de 2009**, la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, procedió a iniciar investigación sancionatoria y formular pliego de cargos, en los siguientes términos:

“(...) ARTÍCULO PRIMERO. Abrir investigación Administrativa Sancionatoria de carácter ambiental en contra del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.130.814, en su calidad de propietario de representante legal del establecimiento **CARNES JM2**, ubicado en la Carrera 62 B No. 57 D – 33 Sur, de la Localidad de Kennedy de esta ciudad,

por cuanto con su conducta presuntamente ha faltado al cumplimiento de las disposiciones legales de la Resoluciones No. 1074 de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Formular contra el señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.130.814, en calidad de propietario de representante legal del establecimiento **CARNES JM2**, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, los siguientes cargos:

Cargo primero: *Por presuntamente verter residuos líquidos industriales a la red de alcantarillado sin el correspondiente registro y permiso de vertimientos, infringiendo el Artículo 1 de la Resolución No. 1074 de 1997(...)*

Que mediante **radicado 2010ER48576 del 31 de agosto de 2010**, el señor **JAIME MORALES MEDINA** informa que desde hace dos años no es dueño del establecimiento JM2, y que este fue cedido a la señora **LUZ MARINA MARTINEZ PABON** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.668.126, no obstante no adjunta ninguna clase de documento que acredite la información.

Que posteriormente, y una vez revisado el sistema de información forest de la entidad, así como el expediente **SDA-08-2009-714** observa esta Dirección de Control que no existe actuación posterior de seguimiento o control a la **Resolución No. 2795 del 19 de marzo de 2009** por parte de la Autoridad Ambiental, por lo cual y en virtud del debido proceso, se entrará a decidir la actuación a proceder bajo los términos del Decreto 1594 de 1984.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos Constitucionales

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia, se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala expresamente que *“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”*.

Que el artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y

sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención, se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de compensación los daños que a éstos se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

2. Fundamentos Legales

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993, consagró las competencias de los grandes centros urbanos, estableciendo:

“(...) Los municipios, o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”

Por otra parte, el párrafo 3º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala que: *“Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.”*

Con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos sancionatorios derivados de la infracción a las disposiciones en materia ambiental, quiso unificar su criterio y orientar su desarrollo procesal a través de un mecanismo o norma de carácter especial.

Que el inciso 2º del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala:

*“(...) **ARTÍCULO 107.-** (...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”.*

Que en relación con la actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente **SDA-08-2009-714** a nombre del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.130.814, presunto responsable del establecimiento **CARNES JM2**, esta Dirección considera tener en cuenta los siguientes aspectos:

3. Normativa procedimental

Que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que: “(...) *Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.*”, por lo cual y para el caso en concreto se deberá dar aplicación del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), por cuanto el presente trámite se inició estando en vigencia dicha norma.

En ese orden de ideas, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, también se permitió señalar:

*“(...) **ARTICULO 64: TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS.** El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

Lo anterior, significa que dado que en el presente proceso sancionatorio ambiental, se inició y se formularon cargos a través de la **Resolución No. 2795 del 19 de marzo de 2009**, dicho proceso debe ser resuelto de conformidad al procedimiento del Decreto 1594 de 1984.

No obstante, y analizado el citado Decreto 1594 esta Secretaría encuentra que, ante el vacío del Decreto 1594 de 1984 respecto del tema de caducidad, resulta procedente dar aplicación al artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que contempla:

*“(...) **ARTICULO 38:** Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.*

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.” (Resaltado fuera del texto original).

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(…) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶...” (subrayado fuera de texto.)*

Dicho lo anterior, del texto del artículo 38 del C.C.A. (Decreto – Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la administración, **disponía de un término de 3 años contados a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos, es decir, día 13 de septiembre de 2007 fecha en la cual tuvo conocimiento del presunto incumplimiento en materia ambiental, conforme lo indican los Conceptos Técnicos No. 12609 de 2007 y No. 07066 del 19 mayo de 2008, hasta el 13 de septiembre de 2010**, no solo para expedir el acto administrativo que resuelve de fondo, sino para que el mismo quedara ejecutoriado conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, para adquirir sus efectos; por lo tanto y en el caso que nos ocupa, es evidente que ha transcurrido más de 3 años, sin que se haya resuelto de fondo el proceso administrativo sancionatorio.

Conforme a lo anterior, esta Autoridad encuentra que el asunto bajo examen, reúne las exigencias establecidas en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto la autoridad ambiental contaba con 3 años, para pronunciarse de fondo en la presente investigación, situación que no ocurrió y por ello ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

Que así las cosas, esta Secretaría considera que, al haber decaído el derecho de acción, se dispondrá la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso administrativo sancionatorio ambiental iniciado mediante la **Resolución No. 2795 del 19 de marzo de 2009**, cuyo proceso quedará contenido en el expediente **SDA-08-2009-714** a nombre del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.130.814, presunto responsable del establecimiento **CARNES JM2**.

III. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Mediante Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006, “*Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones*”, ordenó en su artículo 101, Transformar el

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente- DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte el Decreto 109 de 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 157 de 23 de abril de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

Que finalmente, los numerales 5 y 6) del artículo primero de la Resolución No. 1466 del 24 de mayo de 2018 modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018, el Secretario Distrital de Ambiente delegó en la Dirección de Control Ambiental la facultad de *“Expedir los actos administrativos de legalización de las medidas preventivas impuestas en flagrancia, de las medidas preventivas impuestas, y el acto administrativo mediante el cual se levanta la(s) medida(s) preventiva(s).”* y de *“expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios.”*

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la **CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria en el proceso sancionatorio ambiental iniciado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante **Resolución No. 2795 del 19 de marzo de 2009**, en contra del señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.814, presunto responsable del establecimiento **CARNES JM2**, ubicado en la Carrera 62 B No. 57 D - 33 Sur, de la localidad de Kennedy de esta ciudad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al señor **JAIME MORALES MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.814, en la Carrera 62 B No. 57 D - 33 Sur, de la localidad de Kennedy de esta ciudad, de conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo (Decreto – Ley 01 de 1984 y sus modificaciones).

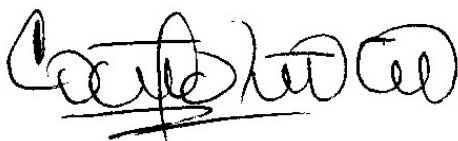
ARTÍCULO TERCERO. – Comuníquese al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. – Remitir copia de la presente Resolución a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y a la Subdirección Financiera de la Entidad, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - Ordenar la publicación de la presente providencia en el Boletín Ambiental. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. – Contra la presente Resolución procede recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria de Ambiente, personalmente y por escrito, o a través de apoderado dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, con el lleno de los requisitos legales previstos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto – Ley 01 de 1984 y sus modificaciones).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

PAOLA CATALINA ISOZA VELASQUEZC.C:	1136879550	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20202151 DE 2020	FECHA EJECUCION:	22/10/2020
------------------------------------	------------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

Revisó:

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C:	52890487	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	10/11/2020
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C:	52890487	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	12/11/2020
EDNA ROCIO JAIMES ARIAS	C.C:	1032427306	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20202222 DE 2020	FECHA EJECUCION:	10/11/2020

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C:	80016725	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	23/11/2020
---------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------

Expediente: SDA-08-2009-714

Proyectó SRHS: EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ AVELLANEDA

Revisó SRHS: FRANK JAVIER MARQUEZ ARRIETA

Ajuste y apoyo en revisión DCA: CATALINA ISOZA VELÁSQUEZ